

PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN, Y/O DEL INMUEBLE UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO DE SAN PEDRO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, LUGAR EN EL QUE SE DETECTARON LAS INSTALACIONES DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN, OPERANDO LA FRECUENCIA 103.1 MHZ.

Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México (Coordenadas 18°55'41.5" N, 99°42'32.9" O).

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil dieciocho.- Visto para resolver el procedimiento administrativo de imposición de sanciones y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación relativo al expediente **E-IFT.UC.DG-SAN.II.0040/2018**, iniciado mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho y notificado el veinticinco de abril del mismo año por conducto de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "IFT" o "Instituto"), en contra del **PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN Y/O DEL INMUEBLE** ubicado en Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55'41.5" N, Longitud 99°42'32.9" O (en adelante el "PRESUNTO RESPONSABLE"), por la presunta infracción al artículo 66 en relación con el 75, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la "LFTR"). Al respecto, se emite la presente Resolución de conformidad con lo siguiente, y

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Instituto el veintinueve de septiembre de dos mil quince, el **C. MIGUEL OROZCO GÓMEZ**,

representante legal de la **CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISIÓN**, denunció la operación de una estación de radiodifusión que transmitía en la frecuencia modulada de **103.1 MHz**, localizada en el Municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, la cual obstruía las vías de comunicación ocasionando interferencia a las estaciones de su representada, y solicitando el inicio de procedimiento sancionatorio correspondiente.

SEGUNDO. Asimismo, por medio de escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Instituto el treinta de septiembre de dos mil quince, la **C. KAREN SÁNCHEZ ABBOTT**, representante legal de **GRUPO NUEVA RADIO, S.A. DE C.V.**, informó la detección de cinco interferencias diarias en la transmisión de la programación de su frecuencia concesionada de 104.9 MHz con distintivo de llamada XHMLO-FM, interferencias que afectan la correcta transmisión de la señal de su representada, solicitando la intervención de este Instituto para verificar las causas que dieron origen a las mencionadas interferencias.

TERCERO. Mediante oficio **IFT/225/UC/DGA-VESRE/366/2017** de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico (en adelante "**DGA-VESRE**"), hizo de conocimiento del Director General de Verificación que derivado de trabajos de vigilancia del espectro radioeléctrico al servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (en adelante **FM**) en el Estado de México, se detectaron en operación, entre otras, la frecuencia **103.1 MHz** en el Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, sin haberse podido identificar la calle y el número del domicilio donde se ubicó la antena transmisora, y solicitando realizar las acciones necesarias para que se condujera la visita de verificación en el poblado referido, con la finalidad de constatar el domicilio del origen de la señal así como si el usuario respectivo contaba con el permiso o autorización correspondiente.

CUARTO. En ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 43, fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto, la Dirección General de Verificación (en adelante la "**DG-VER**"), emitió el oficio **IFT/225/UC/DG-VER/2180/2017** de cuatro de diciembre de dos mil

De conformidad con los artículos 23 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, fracción V, 6, 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 47, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción I, y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprime el contenido de lo testado en virtud de contener datos personales confidenciales.

diecisiete, mediante el cual ordenó la visita de inspección-verificación ordinaria **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, al "PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN ASÍ COMO DEL INMUEBLE UBICADO EN: DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO DE SAN PEDRO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 18°55´41.5" N, LONGITUD 99°42´32.9 O", con el objeto de *"...verificar si LA VISITADA tiene instalados y en operación, equipos de radiodifusión con los que use, aproveche o explote la frecuencia de 103.1 MHz para prestar el servicio de radiodifusión sonora; en su caso, comprobar si cuenta con el instrumento legal vigente emitido por autoridad competente que permita el uso legal de la frecuencia referida y la prestación del servicio indicado"*.

QUINTO. En consecuencia el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, los inspectores-verificadores de telecomunicaciones y radiodifusión (en adelante "**LOS VERIFICADORES**"), realizaron la comisión de verificación a la visitada y levantaron el acta de verificación ordinaria número **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, en el inmueble ubicado en Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, la cual se dio por terminada el mismo día de su inicio.

SEXTO. Dentro del acta de verificación ordinaria número **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, **LOS VERIFICADORES**, hicieron constar que en el inmueble citado, se detectaron equipos de radiodifusión operando la frecuencia **103.1 MHz**. Asimismo, se asentó que la persona que atendió la diligencia dijo llamarse "**CONFIDENCIAL POR LEY**" y se negó a proporcionar identificación alguna que permitiera corroborar su identidad (en lo sucesivo "**LA VISITADA**"); y ante su negativa de designar testigos de asistencia, **LOS VERIFICADORES** nombraron a "**CONFIDENCIAL POR LEY**", quienes aceptaron el cargo conferido.

SÉPTIMO. Una vez cubiertos los requisitos de ley, **LOS VERIFICADORES** acompañados de la persona que atendió la visita en el inmueble señalado y de los testigos de asistencia, procedieron a verificar las instalaciones de la radiodifusora que opera la frecuencia **103.1 MHz**, encontrando que:

"Inmueble de 1 nivel color Amarillo Pardo, con 5 ventanas con marco de ladrillos, protegido por una reja color blanco. Al frente cuenta con un jardín y en la azotea con un tinaco color negro, al lado de una antena".

Asimismo, solicitaron a la persona que recibió la visita en el inmueble señalado, informara si la estación que transmite en la frecuencia **103.1 MHz**, cuenta con concesión o permiso expedido por la Autoridad Federal para hacer uso de esa frecuencia, a lo que **LA VISITADA** manifestó que *"Como le dije, desconozco para que usaban ese equipo y no cuento con la información que usted me solicita"*.

OCTAVO. En razón de que **LA VISITADA** no exhibió el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que ampare o legitime la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia **103.1 MHz**, **LOS VERIFICADORES** procedieron al aseguramiento de los equipos encontrados en el inmueble en donde se practicó la visita, destinados a la operación de la estación.

Previamente a la conclusión de la diligencia, en términos del artículo 68 de Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en lo sucesivo "**LFPA**"), **LOS VERIFICADORES** informaron a la persona que recibió la visita, que le asistía el derecho de manifestar lo que a sus intereses conviniera, respecto de los hechos asentados en el acta de verificación de mérito, ante lo cual manifestó: *"Me reservo el derecho de manifestar cualquier asunto relacionado con la visita"*.

Al finalizar la diligencia respectiva se hizo del conocimiento de **LA VISITADA** que en términos del artículo 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (en lo sucesivo "**LVGC**") contaba con un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la práctica de la diligencia para presentar las pruebas y defensas que a su interés conviniera, mismo que transcurrió del cinco al dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, ello sin contar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete del mismo mes y año, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, en términos del artículo 28 de la Ley Federal de la **LFPA**.

Cabe precisar que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, no existe constancia alguna de que el **PRESUNTO RESPONSABLE** o su representación legal hubieran exhibido pruebas y defensas de su parte.

NOVENO. La **DG-VER**, con la finalidad de allegarse de elementos que permitieran la plena identificación del presunto infractor emitió los oficios **IFT/225/UC/DG-VER/024/2018** e **IFT/225/UC/DG-VER/025/2018**, ambos de ocho de enero de dos mil dieciocho, dirigidos a la Oficina Registral en Tenango del Instituto de la Función Registral del Estado de México y al Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística y Catastral del Estado de México, respectivamente, en los que se les solicitó lo siguiente:

"Proporcione a esta Autoridad mediante constancia debidamente certificada, el nombre de la persona física o moral propietaria y/o poseedora del inmueble ubicado en Domicillo Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55'41.5" N, Longitud 99°42'32.9" O."

En respuesta a la solicitud contenida en el oficio **IFT/225/UC/DG-VER/025/2018**, de ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio **203B10200/088/2018** de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, recibido en Oficialía de Partes de este Instituto el treinta y uno de enero siguiente, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, envió diverso oficio **203B13000/062/2018** de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a través del cual la Dirección de Catastro de ese mismo Instituto, informó que:

"(...) una vez ubicado el punto de referencia con las coordenadas proporcionadas en el oficio de referencia, en la Cartografía Catastral a nivel manzana, el inmueble se encuentra en el municipio de Villa Guerrero 064, Zona Catastral 12, Manzana Catastral 072, y una vez agotada la investigación en los archivos que obran en este Instituto, no fueron localizados registros inscritos en el Padrón Catastral Municipal (...)"

Por su parte, respecto del oficio IFT/225/UC/DG-VER/024/2018, de ocho de enero de dos mil dieciocho la DG-VER no recibió la respuesta correspondiente de la autoridad requerida.

De lo anterior se advierte que no fue posible identificar al propietario del inmueble donde se aseguraron los equipos de radiodifusión relacionados con el acta de mérito.

DÉCIMO. En consecuencia, mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/0356/2018 de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la DG-VER remitió la *"PROPUESTA QUE FORMULA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANCIONES, A EFECTO DE QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN Y LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN, EN CONTRA DEL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN ASÍ COMO DEL INMUEBLE UBICADO EN: DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO DE SAN PEDRO BUENO AIRES, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 18°55'41.5" N, LONGITUD 99°42'32.9 O (LUGAR EN EL QUE SE DETECTARON LAS INSTALACIONES DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN, OPERANDO LA FRECUENCIA DE 103.1 MEGA HERTZ), POR LA PRESUNTA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 66 EN RELACIÓN CON EL 75, Y LA PROBABLE ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 305, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DERIVADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN NÚMERO IFT/UC/DG-VER/392/2017."*

DÉCIMO PRIMERO. En virtud de lo anterior, por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho, el Instituto por conducto del Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE**, por presumirse la infracción al artículo 66 en relación con el 75 y la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la LFTR, ya que de la propuesta de la DG-VER, se contaban con elementos suficientes para

acreditar la prestación del servicio de radiodifusión a través de la operación, uso y aprovechamiento de una vía general de comunicación (espectro radioeléctrico) consistente en la frecuencia **103.1 MHz**, por parte del **PRESUNTO RESPONSABLE** sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente de conformidad con lo establecido en la **LFTR**.

DÉCIMO SEGUNDO. El día veinticinco de abril de dos mil dieciocho se notificó el inicio del procedimiento sancionatorio en el cual se concedió al **PRESUNTO RESPONSABLE** un plazo de quince días, para que en uso del beneficio de la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "**CPEUM**") y 72 de la **LFPA** de aplicación supletoria en términos del artículo 6, fracción IV de la **LFTR**, expusiera lo que a su derecho conviniera y, en su caso aportara las pruebas con que contara.

El término concedido al **PRESUNTO RESPONSABLE** en el acuerdo de inicio para presentar manifestaciones y pruebas, transcurrió del veintiséis de abril al diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

En este sentido, los quince días hábiles que se otorgaron al **PRESUNTO INFRACTOR**, comprendieron los días veintiséis, veintisiete y treinta de abril, así como dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de mayo, sin contar los días veintiocho y veintinueve de abril, así como primero, cinco, seis, doce y trece de mayo dos mil dieciocho, por haber sido sábados, domingos y día inhábil en términos del artículo 28 de la **LFPA**.

DÉCIMO TERCERO. De las constancias que forman el presente expediente se observó que el **PRESUNTO RESPONSABLE** no presentó escrito de manifestaciones y pruebas, por lo que mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, notificado por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este **Instituto** el treinta del mismo mes y año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en que se actúa y se tuvo por precluido su derecho para presentar pruebas y defensas de su parte.

En consecuencia, por así corresponder al estado procesal que guardaba el presente asunto, con fundamento en el artículo 56 de la **LFPA**, se pusieron a su disposición los autos del presente expediente para que dentro del término de diez días hábiles formulara alegatos, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitiría la Resolución que conforme a derecho correspondiera.

DÉCIMO CUARTO. El término concedido al **PRESUNTO RESPONSABLE** para presentar sus alegatos transcurrió del primero al catorce de junio sin considerar los días dos, tres, nueve y diez de junio, todos de dos mil dieciocho, por haber sido sábados y domingos en términos del artículo 28 de la **LFPA**.

De las constancias que forman el presente expediente se advierte que el **PRESUNTO RESPONSABLE** no presentó sus alegatos, por lo que mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por precluido su derecho para ello y por lo tanto fue remitido el presente expediente a este órgano colegiado para la emisión de la Resolución que conforme a derecho resulte procedente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El Pleno del **Instituto** es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafos, décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la **CPEUM**; 1, 2, 6, fracciones II, IV y VII, 7, 15, fracción XXX, 17, penúltimo y último párrafos, 66, 75, 297, primer párrafo, 298, inciso E), fracción I y 305 de la **LFTR**; 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16 fracción X, 28, 49, 50, 59, 70, fracciones II y VI, 72, 73, 74 y 75 de la **LFPA**; y 1, 4, fracción I y 6, fracción XVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante "**ESTATUTO**").

SEGUNDO. CONSIDERACIÓN PREVIA

La Soberanía del Estado sobre el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, que es el medio en que se propagan las señales de audio o de audio y video asociados mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones de radio y televisión, se ejerce observando lo dispuesto en los artículos 27 párrafos cuarto y sexto y 28 de la **CPEUM**, los cuales prevén que el dominio de la Nación sobre el espectro radioeléctrico es inalienable e imprescriptible y que la explotación, uso o aprovechamiento de dicho recurso por los particulares o por sociedades debidamente constituidas conforme a las leyes mexicanas, sólo puede realizarse mediante títulos de concesión otorgados por el **IFT**, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la **CPEUM**, el **IFT** es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, para lo cual tiene a su cargo, entre otros, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Conforme a lo anterior, el **IFT** es el encargado de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en las concesiones y autorizaciones que se otorguen para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, dedicadas al servicio público de radiodifusión como vehículo de información y de expresión, a fin de asegurar que se realice de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Bajo esas consideraciones, el ejercicio de las facultades de supervisión y verificación por parte del **IFT** traen aparejada la relativa a imponer sanciones por el incumplimiento a lo establecido en las leyes correspondientes o en los respectivos títulos de concesión, asignaciones o permisos, con la finalidad de inhibir aquellas conductas que atenten contra los objetivos de la normatividad en la materia.

En ese sentido, la Unidad de Cumplimiento, con el debido procedimiento administrativo seguido al efecto, propuso a este Pleno resolver sobre la declaratoria de pérdida de bienes en beneficio de la Nación, en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE**, al considerar que se actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la **LFTR**

Ahora bien, para determinar la procedencia en la imposición de una sanción, la **LFTR** aplicable en el caso en concreto, no sólo establece obligaciones para los concesionarios y permisionarios y en general para cualquier persona, sino también señala supuestos de incumplimiento específicos y las consecuencias jurídicas a las que se harán acreedores en casos de infringir la normatividad en la materia.

Es decir, al pretender imponer una sanción, esta autoridad debe analizar minuciosamente la conducta que se le imputa al **PRESUNTO RESPONSABLE** y determinar si la misma es susceptible de ser sancionada en términos del precepto legal o normativo que se considera violado.

En este orden de ideas, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el desarrollo jurisprudencial de los principios del derecho penal en el campo administrativo sancionador irá formando los principios propios para este campo del *ius puniendi* del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido considerar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal, como lo es el principio de inaplicabilidad de la analogía en materia penal o tipicidad.

En ese sentido, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal al ser manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de éstos, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudir al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida por el poder legislativo, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

Así, en la especie se considera que la conducta desplegada por el presunto infractor vulnera el contenido del artículo 66 de la **LFTR**, que al efecto establece que se requiere de concesión única otorgada por el **IFT** para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Desde luego, el mencionado precepto dispone lo siguiente:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Lo anterior, en relación con el artículo 75 de la **LFTR**, el cual dispone que corresponde al **Instituto** el otorgamiento de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, para efectos de cumplir con el citado principio de tipicidad, resulta importante hacer notar que la conducta antes referida, misma que resulta contraria a la ley, es susceptible de ser sancionada en términos de la fracción I del inciso E) del artículo 298 de la **LFTR**, mismo que establece que la sanción que en su caso procede imponer a quien preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, consiste en una multa por el equivalente del 6.01% hasta el 10% de los ingresos acumulables de la persona infractora.

En efecto, el artículo 298, inciso E), fracción I de la **LFTR**, establece expresamente lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E). Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización...

Asimismo, la comisión de la conducta en análisis, actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la **LFTR**, misma que establece como consecuencia, la pérdida en beneficio de la Nación, de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones. En efecto dicho precepto legal expresamente establece:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

De lo anterior podemos concluir que el principio de tipicidad sólo se cumple cuando en una norma consta una predeterminación tanto de la infracción como de la sanción, es decir que la ley describa un supuesto de hecho determinado que permita predecir las conductas infractoras y las sanciones correspondientes para tal actualización de hechos, situación que se hace patente en el presente asunto.

Por otra parte, resulta importante mencionar que para el ejercicio de la facultad sancionadora, en el caso de incumplimiento de las disposiciones legales en materia de radiodifusión, el artículo 297 primer párrafo de la **LFTR** establece que para la imposición de las sanciones previstas en dicho cuerpo normativo, se estará a lo previsto por la **LFPA**, la cual prevé dentro de su Título Cuarto, Capítulo Único, el procedimiento para la imposición de sanciones.

En efecto, los artículos 70 y 72 de la **LFPA**, establecen que para la imposición de una sanción, se deben cubrir dos premisas: i) que la sanción se encuentre prevista en la ley y ii) que previamente a la imposición de la misma, la autoridad competente notifique al presunto infractor el inicio del procedimiento respectivo, otorgando al efecto un plazo

de quince días para que el presunto infractor exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Así las cosas, al iniciarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE**, se presumió el incumplimiento de lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75 de la **LFTR** ya que no contaba con la concesión correspondiente para la prestación del servicio público de radiodifusión, en concreto para operar la frecuencia **103.1 MHz**.

En este sentido, a través de la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento, la Unidad de Cumplimiento dio a conocer al **PRESUNTO RESPONSABLE** la conducta que supuestamente viola el artículo 66 en relación con el 75 de la **LFTR**, así como las sanciones previstas en los artículos 298, inciso E), fracción I y 305 de dicha ley por la comisión de la misma.

Por ello, se le otorgó un término de quince días hábiles para que en uso de su garantía de audiencia rindiera las pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 14 de la **CPEUM** en relación con el artículo 72 de la **LFPA**.

Concluido el periodo de pruebas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la **LFPA**, la Unidad de Cumplimiento puso las actuaciones a disposición del interesado, para que formulara sus alegatos.

Una vez desahogado el periodo probatorio y vencido el plazo para formular alegatos, la Unidad de Cumplimiento remitió el expediente de mérito en estado de resolución al Pleno de este **IFT**, quien se encuentra facultado para dictar la resolución que en derecho corresponda.

Bajo ese contexto, el procedimiento administrativo de imposición de sanciones que se sustancia, se realizó conforme a los términos y principios procesales que establece la **LFPA** y los artículos 14 y 16 de la **CPEUM** consistentes en: i) otorgar garantía de audiencia al presunto infractor; ii) desahogar pruebas; iii) recibir alegatos, y iv) emitir la resolución

que en derecho corresponda. Lo anterior, con independencia de que el **PRESUNTO RESPONSABLE** no ofreció pruebas ni presentó alegatos a su favor.

En las relatadas condiciones, al tramitarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción bajo las anteriores premisas, debe tenerse por satisfecho el cumplimiento de lo dispuesto en la **CPEUM**, las leyes ordinarias y los criterios judiciales que informan cual debe ser el actuar de la autoridad para resolver el presente caso.

TERCERO. HECHOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN Y DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN.

Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este **Instituto** el veintinueve de septiembre de dos mil quince, el **C. MIGUEL OROZCO GÓMEZ**, representante legal de la **CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISIÓN**, denunció la operación de una estación de radiodifusión que transmitía en la frecuencia modulada de **103.1 MHz**, localizada en el Municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, la cual obstruía las vías de comunicación ocasionando interferencia a las estaciones de su representada, y solicitando el inicio de procedimiento sancionatorio correspondiente.

Asimismo, por medio de escrito presentado en la Oficialía de Partes de este **Instituto** el treinta de septiembre de dos mil quince, la **C. KAREN SÁNCHEZ ABBOTT**, representante legal de **GRUPO NUEVA RADIO, S.A. DE C.V.**, informó la detección de cinco interferencias diarias en la transmisión de la programación de su frecuencia concesionada de 104.9 MHz con distintivo de llamada XHMLO-FM, interferencias que afectan la correcta transmisión de la señal de su representada, solicitando la intervención de este Instituto para verificar las causas que dieron origen a las mencionadas interferencias.

En relatadas condiciones, mediante oficio **IFT/225/UC/DGA-VESRE/366/2017** de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la **DGA-VESRE**, hizo de conocimiento del Director General de Verificación que derivado de trabajos de vigilancia del espectro radioeléctrico al servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (en adelante

FM) en el Estado de México, se detectaron en operación, entre otras, la frecuencia **103.1 MHz** en el Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, sin haberse podido identificar la calle y el número del domicilio donde se ubicó la antena transmisora, y solicitando realizar las acciones necesarias para que se condujera la visita de verificación en el poblado referido, con la finalidad de constatar el domicilio del origen de la señal así como si el usuario respectivo contaba con el permiso o autorización correspondiente.

Derivado de lo anterior y en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 43, fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto, la **DG-VER** emitió la orden de inspección-verificación **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dirigida al *"PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN ASÍ COMO DEL INMUEBLE UBICADO EN: DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO DE SAN PEDRO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 18°55'41.5" N, LONGITUD 99°42'32.9 O"*, la cual tuvo por objeto *"...verificar si LA VISITADA tiene instalados y en operación, equipos de radiodifusión con los que use, aproveche o explote la frecuencia de 103.1 MHz para prestar el servicio de radiodifusión sonora; en su caso, comprobar si cuenta con el instrumento legal vigente emitido por autoridad competente que permita el uso legal de la frecuencia referida y la prestación del servicio indicado"*.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de inspección-verificación **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, **LOS VERIFICADORES** de la **DG-VER** en compañía del personal de la **DGA-VESRE** se constituyeron en esa fecha en el inmueble ubicado en Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia de **103.1 MHz**, y levantaron el acta de verificación ordinaria número **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, dándose por terminada dicha diligencia el mismo día de su inicio.

De conformidad con los artículos 23 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, fracción V, 6, 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 47, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción I, y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprime el contenido de lo testado en virtud de contener datos personales confidenciales.

Hecho lo anterior, y cerciorados **LOS VERIFICADORES**, de ser el domicilio correcto desde donde se transmitía la frecuencia **103.1 MHz.**, y una vez que se identificaron, fueron atendidos por quien dijo llamarse **"CONFIDENCIAL POR LEY"**, quien se negó a proporcionar identificación alguna que permitiera corroborar su identidad, cuya media filiación es la siguiente **"CONFIDENCIAL POR LEY"**, en lo sucesivo **LA VISITADA**, haciendo entrega de la orden de visita **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, solicitándole firmara de recibido una copia para constancia, misma que recibió pero se negó a firmar de recibido (oficio que se agregó al acta como Anexo número 2).

Asimismo, se le requirió nombrara dos testigos de asistencia, a lo que dicha persona se negó a designar testigos, ante tal negativa **LOS VERIFICADORES** nombraron a los **CC. "CONFIDENCIAL POR LEY"** como testigos de asistencia, quienes aceptaron el cargo conferido (en lo sucesivo **LOS TESTIGOS**).

Hecho lo anterior, en el inmueble donde se llevó a cabo la diligencia, **LOS VERIFICADORES**, acompañados de la persona que recibió la visita y **LOS TESTIGOS** constataron que se trataba de:

"Inmueble de 1 nivel color Amarillo Pardo, con 5 ventanas con marco de ladrillos, protegido por una reja color blanco. Al frente cuenta con un jardín y en la azotea con un tinaco color negro, al lado de una antena".

Con fundamento en los artículos 291 de la **LFTR** y 64 de la **LFPA**, **LOS VERIFICADORES** solicitaron a la persona que recibió la visita les permitiera el acceso al inmueble en que se actúa y les otorgara las facilidades para cumplir con su comisión.

La persona que recibió la diligencia permite el acceso y manifestó: *"Claro. Brindo todas las facilidades para cumplir su trabajo."*

Una vez solicitado y permitido el acceso al inmueble, **LOS VERIFICADORES** detectaron:

"la existencia al interior del inmueble de un transmisor de FM que muestra la frecuencia 103.1 MHz, sin marca comercial aparente. Se encuentra además

De conformidad con los artículos 23 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, fracción V, 6, 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 47, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción I, y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprime el contenido de lo testado en virtud de contener datos personales confidenciales.

un equipo de Cómputo, sin marca aparente, color negro, sin monitor, conectado al transmisor”.

De igual forma, previa autorización de **LA VISITADA**, **LOS VERIFICADORES** tomaron fotografías de los equipos que se encontraron instalados y en operación, hecho lo anterior, **LOS VERIFICADORES** solicitaron a la persona que recibió la visita para que bajo protesta de decir verdad diera respuesta entre otras a las siguientes preguntas: “¿Qué persona física o moral es el propietario, poseedor, responsable o encargado del inmueble donde se actúa? a lo que la persona que atendió la visita respondió:

*“Mi hermano es el propietario del inmueble. Solo puedo decirles que se llama **“CONFIDENCIAL POR LEY”**,*

“¿Qué persona física o moral es el propietario, poseedor, responsable o encargado u operador de los equipos de radiodifusión detectados en el inmueble donde se actúa? a lo que la persona que atendió la visita respondió:

“Como le indico, desconozco su nombre pues no soy la propietaria. Solo se que un señor le rentaba a mi hermano” (sic),

“¿Qué uso tienen los equipos de radiodifusión detectados en el inmueble en que se actúa? a lo que la persona que atendió la visita respondió:

“Desconozco el uso. Creo que el señor dijo que era para cuestiones de medir el clima o algo así”.

Del mismo modo **LOS VERIFICADORES** le preguntaron si sabía si “¿Existen emisiones de anuncios, mensajes comerciales o de publicidad a través de los equipos de radiodifusión detectados en el inmueble y en su caso, si existía algún pago por parte de los anunciantes o venta de publicidad?” a lo que **LA VISITADA** manifestó: *“Desconozco sinceramente eso”.*

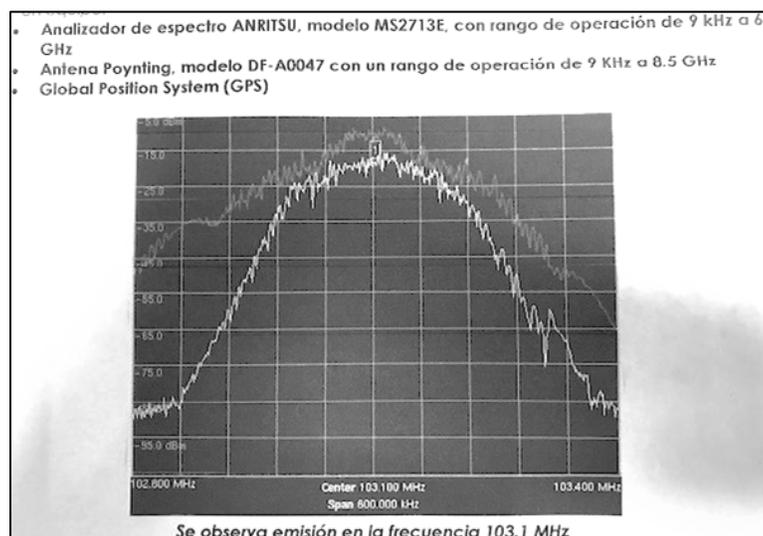
Acto continuo, **LOS VERIFICADORES**, la persona que recibió la visita y **LOS TESTIGOS**, se trasladaron al exterior del inmueble para solicitar al personal de la **DGA-VESRE**, realizara

el monitoreo del espectro radioeléctrico y la detección de emisiones radioeléctricas para determinar qué frecuencias son utilizadas por LA VISITADA mediante los equipos de telecomunicaciones detectados en el domicilio.

En virtud de lo anterior, personal técnico de la DGA-VESRE realizó un monitoreo del espectro radioeléctrico con los equipos encendidos y en operación, utilizando el siguiente equipo:

- *Analizador de espectro portátil marca ANRITSU, modelo MS2713E, con rango de operación de 9 KHz a 6 GHz.*
- *Antena direccional marca Poynting modelo DF-A0047, con rango de operación de 9 KHz a 8.5GHz.*
- *Global Position System (GPS)*

Lo anterior a efecto de determinar si la persona visitada usaba o aprovechaba frecuencias mediante los equipos de radiodifusión detectados en el inmueble, asentándose en el acta de verificación número IFT/UC/DG-VER/392/2017 que: *"El resultado impreso del radiomonitoreo del espectro radioeléctrico es entregado a LOS VERIFICADORES en presencia de la persona que recibe la visita y LOS TESTIGOS, el cual indica que en el inmueble donde se actúa, existen emisiones radioeléctricas en la frecuencia 103.1 MHz".*



Cabe precisar que la grabación del audio de la señal transmitida en la frecuencia **103.1 MHz**, emitida por los equipos detectados durante la visita **IFT/UC/ DG-VER/392/2017**, fue digitalizada y almacenada en un disco compacto (CD) el cual fue agregado como anexo 5 del acta de mérito.

Posteriormente, **LOS VERIFICADORES** requirieron a la persona que atendió la visita que mostrara el original y entregara en copia simple, el instrumento legal vigente emitido por autoridad competente que justificara el uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia **103.1 MHz**, para prestar el servicio de radiodifusión sonora, a lo que manifestó: *"Como le dije, desconozco para que usaban ese equipo y no cuento con la información que usted me solicita"*.

En razón de que la visitada no exhibió el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que ampare el uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia **103.1 MHz**, **LOS VERIFICADORES** procedieron a solicitar a la persona que atendió la visita que apagara y desconectara los equipos instalados, así como al aseguramiento de los equipos encontrados en el inmueble en donde se practicó la visita, manifestando *"Procedo a apagarlo y desconectarlo, sin problema alguno"*, por lo que **LOS VERIFICADORES** realizaron el aseguramiento de los equipos de radiodifusión, quedando como depositario interventor de los mismos, Raúl Leonel Mulhía Arsaluz, conforme a lo siguiente:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0303
CPU	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0310
Antena Dipolo	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0311

Previamente a la conclusión de la diligencia, en términos del artículo 68 de la LFPA, LOS VERIFICADORES informaron a la persona que recibió la visita, que le asistía el derecho de manifestar lo que a sus intereses conviniera, respecto de los hechos asentados en el acta de verificación de mérito, ante lo cual manifestó: *"Me reservo el derecho de manifestar cualquier asunto relacionado con la visita"*.

Asimismo, en términos del artículo 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se informó a la persona que recibió la visita, que contaba con el término de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a dicha actuación, para que exhibiera las manifestaciones y pruebas de su intención, en las oficinas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dicho plazo transcurrió del cinco al dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, ello sin contar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete del mismo mes y año, por haber sido sábados, domingos en términos del artículo 28 de la Ley Federal de la LFPA, término que feneció sin que se presentara escrito alguno.

Derivado de lo anterior y una vez analizadas las constancias respectivas, la DG-VER estimó que con su conducta el PRESUNTO RESPONSABLE presumiblemente contravino lo dispuesto por el artículo 66 en relación con el 75, y actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la LFTR. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

A) Artículo 66 en relación con el 75 de la LFTR.

El artículo 66 de la LFTR, establece que: *"Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."*

Por su parte el artículo 75 de la LFTR, dispone que *"Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título."*

En este sentido, dicha concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, es el título habilitante que otorga a su titular la

legitimación para prestar servicios de radiodifusión. Sin embargo, de las manifestaciones expresas realizadas tras la diligencia y del informe de radiomonitorio, se demuestra fehacientemente que el **PRESUNTO RESPONSABLE**, al momento de la diligencia, se encontraba usando la frecuencia **103.1 MHz** de la banda de Frecuencia Modulada en el domicilio ubicado en: Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55'41.5" N, Longitud 99°42'32.9" O, sin contar con el documento idóneo que amparara la prestación de dicho servicio.

Asimismo, con motivo del monitoreo realizado en dicho domicilio, se constató que el uso de la frecuencia **103.1 MHz**, no estaba registrada a concesionario o autorizado alguno para esa entidad, dentro de la infraestructura de Estaciones de Radio **FM** publicada en la página web del Instituto.

Ahora bien, de los hechos que se hicieron constar en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA** durante el desarrollo de la visita de inspección-verificación, se desprende lo siguiente:

- a) Del monitoreo, así como de las grabaciones de la transmisión realizados al momento de la diligencia se constata que el **PRESUNTO RESPONSABLE** se encontraba prestando servicios de radiodifusión mediante el uso de la frecuencia **103.1 MHz** en la banda de FM.
- b) El **PRESUNTO RESPONSABLE** no cuenta con título de concesión que ampare el uso de la frecuencia **103.1 MHz**, para prestar el servicio de radiodifusión, lo cual se deduce al haber manifestado la persona que atendió la visita que no contaba con la información solicitada.
- c) **LOS VERIFICADORES** colocaron el sello de aseguramiento **0303** a un Transmisor sin marca, sin modelo y sin número de serie; sello de aseguramiento **0310** a un CPU sin marca, sin modelo y sin número de serie; y sello de aseguramiento **0311** a una Antena Dipolo sin marca, sin modelo y sin número de serie.

Por tanto, se acredita la infracción al artículo 66 en relación con el 75, de la **LFTR**, toda vez que al momento de llevarse a cabo la visita de inspección-verificación, se detectó que en el inmueble visitado, se prestaba el servicio de radiodifusión a través del uso de

la frecuencia **103.1 MHz** de FM, sin contar con la respectiva concesión, permiso o autorización emitida por autoridad competente.

B) Artículo 305 de la LFTR.

En lo que respecta al artículo 305 de la **LFTR**, dicha disposición establece que *"Las personas que presten servicios de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones"*.

En efecto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana, con las restricciones establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables, pero para su aprovechamiento se requiere concesión otorgada conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Al respecto, durante la diligencia de inspección-verificación, **LOS VERIFICADORES**, realizaron el monitoreo de frecuencias en FM y corroboraron que la frecuencia **103.1 MHz** estaba siendo utilizada.¹

Asimismo, se corroboró que el **PRESUNTO RESPONSABLE** se encontraba prestando el servicio de radiodifusión sin contar con el título de concesión, permiso o autorización respectivos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, de la **LFTR**.

Ahora bien, en el dictamen remitido por la **DG-VER** se consideró que el **PRESUNTO RESPONSABLE** prestaba el servicio público de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencia **103.1 MHz**, sin contar con la

¹ Sobre el particular, obtuvieron grabaciones del audio de las transmisiones, mismas que obran en el presente expediente.

concesión o permiso otorgado por la autoridad competente y en consecuencia el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento de imposición de sanción respectivo, mismo que se procede a resolver por éste Órgano Colegiado.

Lo anterior, considerando que de conformidad con los artículos 15, fracción XXX de la LFTR y 41 en relación con el 44 fracción I, y 6, fracción XVII del **ESTATUTO**, el Titular de la Unidad de Cumplimiento tiene facultad para sustanciar procedimientos administrativos sancionatorios y el Pleno del Instituto se encuentra facultado para imponer las sanciones respectivas y declarar la pérdida de los bienes, instalaciones y equipos a favor de la Nación, por el incumplimiento e infracción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

CUARTO. MANIFESTACIONES Y PRUEBAS.

Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/0356/2018 de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la DG-VER remitió la *"PROPUESTA QUE FORMULA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANCIONES, A EFECTO DE QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN Y LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN, EN CONTRA DEL PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN ASÍ COMO DEL INMUEBLE UBICADO EN: DOMICILIO CONOCIDO, PUEBLO DE SAN PEDRO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 18°55'41.5" N, LONGITUD 99°42'32.9 O (LUGAR DONDE SE DETECTARON LAS INSTALACIONES DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN, OPERANDO LA FRECUENCIA DE 103.1 MEGA HERTZ), POR LA PRESUNTA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 66 EN RELACIÓN CON EL 75, Y LA PROBABLE ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 305, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DERIVADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN NÚMERO IFT/UC/DG-VER/392/2017."*

En consecuencia, mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y la declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en el que se le otorgó al **PRESUNTO RESPONSABLE**, un término de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas con que contara con relación con los presuntos incumplimientos imputados.

El término concedido al **PRESUNTO RESPONSABLE** en el acuerdo de inicio para presentar manifestaciones y pruebas, transcurrió del veintiséis de abril al diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

En este sentido, los quince días hábiles que se otorgaron al **PRESUNTO INFRACTOR**, comprendieron los días veintiséis, veintisiete y treinta de abril, así como dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de mayo, sin contar los días veintiocho y veintinueve de abril, así como primero, cinco, seis, doce y trece de mayo dos mil dieciocho, por haber sido sábados y domingos y día inhábil en términos del artículo 28 de **LFPA**.

Ahora bien, en aras de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la **CPEUM**, así como con el principio de exhaustividad en el dictado de las resoluciones administrativas, de conformidad con los artículos 13 y 16, fracción X, de la **LFPA**, esta autoridad procede a estudiar y analizar en esta parte de la resolución los argumentos que, en su caso, hubieran sido presentados por el **PRESUNTO INFRACTOR**, aclarando que el procedimiento administrativo sancionador, ha sido definido por el Pleno de la **SCJN** como *"el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas ya sean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad, en todo caso, sea imponer alguna sanción."*²

² Párrafo 45, Engrose versión pública, Contradicción de Tesis 200/2013 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto en sesión del 28 de enero de 2014, consultable en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx>

De la definición señalada por nuestro Máximo Tribunal se puede advertir que el objeto del procedimiento administrativo sancionador es el de conocer irregularidades o faltas, por lo que se infiere que la *litis* del mismo se sujeta únicamente a acreditar o desvirtuar la comisión de la conducta sancionable, lo cual se fortalece con la imposibilidad de impugnar actos emitidos durante el procedimiento.

Por tanto, el análisis de los mismos debe en todo caso estar encaminado a desvirtuar las imputaciones realizadas por la autoridad, relacionadas con la comisión de las conductas presuntamente sancionables; como lo es la probable infracción a lo dispuesto en los artículos 66 en relación con el 75 y la presunta actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la **LFTR**.

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo señalado en los Resultandos **DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO** de la presente Resolución, y toda vez que el **PRESUNTO RESPONSABLE** omitió presentar pruebas y defensas dentro del plazo establecido para ello, por proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, notificado por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este **Instituto** el treinta del mismo mes y año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo en que se actúa y se tuvo por precluido su derecho para manifestar lo que a su derecho conviniera y ofrecer pruebas. Lo anterior, con fundamento en los artículos 72 de la **LFPA** y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles ("**CFPC**"), de aplicación supletoria en términos de los artículos 6, fracciones IV y VII de la **LFTR** y 2 de la **LFPA**.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, en Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: la. CCV/2013 (100.), Página: 565 cuyo Rubro y texto son del tenor siguiente:

"PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La preclusión es una sanción que da seguridad

*e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas etapas del/procedimiento **adquieren** firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí que dicha institución no contraviene el principio de justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes.”*

En tal sentido, no obstante haber sido legalmente notificado el **PRESUNTO RESPONSABLE** en el domicilio en el que se detectaron los equipos prestando el servicio de radiodifusión, según constancias que obran en la Unidad de Cumplimiento, ninguna persona compareció al presente procedimiento a defender sus intereses.

En tal virtud, considerando que el **PRESUNTO RESPONSABLE** fue omiso en presentar las pruebas y manifestaciones que a su derecho convinieran, no obstante haber sido debidamente llamado al presente procedimiento, y al no existir constancia alguna que tienda a desvirtuar el probable incumplimiento materia del presente procedimiento ni existir controversia en los hechos y derecho materia del mismo, lo procedente es emitir la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en lo elementos con que cuenta esta autoridad.

En efecto, lo establecido en el acuerdo de inicio del procedimiento que en este acto se resuelve constituye una presunción legal *iuris tantum*, la cual sólo es destruible mediante otra probanza que se aporte en sentido contrario, ya que de no ser así, la misma tiene valor probatorio pleno.

Desde luego, para que se pueda desvirtuar la presunción legal, la idoneidad de la contraprueba tiene que ser contundente para vencer la plenitud convictiva que la ley le atribuye a la primera, de manera que si el presunto infractor no ofrece prueba tendiente a desvirtuar la presunción de incumplimiento detectado, como aconteció en

la especie, entonces, no es posible vencer la solidez atribuida a la presunción relativa de que se trate.

Tal y como consta de los criterios vertidos con anterioridad, las presunciones *iuris tantum* sólo pueden ser desvirtuadas mediante una contraprueba suficiente para destruirla; en caso contrario, se genera una confesión ficta con los efectos legales de prueba plena.

En ese orden de ideas, al no haber realizado el **PRESUNTO RESPONSABLE**, manifestación alguna con relación al acuerdo de inicio del procedimiento en que se actúa y tampoco ofrecer pruebas de su parte, esta autoridad se encuentra en posibilidad de resolver conforme a los elementos que obran en el expediente respectivo, particularmente de lo asentado en el acta de verificación respectiva de donde se desprenden con claridad los elementos que acreditan la conducta imputada, consistente en la prestación de servicios de radiodifusión utilizando la frecuencia **103.1 MHZ** en el Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, sin contar con la concesión correspondiente, documento que hace prueba plena en términos del artículo 202 del **CFPC**.

QUINTO. ALEGATOS

Siguiendo las etapas del debido proceso, mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, notificado por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este **Instituto** el treinta del mismo mes y año, se concedió al **PRESUNTO RESPONSABLE** un plazo de diez días hábiles para formular alegatos, el cual corrió del primero al catorce de junio sin considerar los días dos, tres, nueve y diez de junio, todos de dos mil dieciocho, por haber sido sábados y domingos en términos del artículo 28 de la **LFPA**.

De las constancias que forman parte del presente expediente, se observa que para tal efecto, el **PRESUNTO RESPONSABLE** no presentó alegatos ante éste **IFT**.

En tal sentido, de acuerdo a lo señalado en el Resultando **DÉCIMO CUARTO** de la presente Resolución, por proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el veintisiete de junio de dos

mil dieciocho, se tuvo por perdido el derecho del **PRESUNTO RESPONSABLE** para formular alegatos de su parte con fundamento en los artículos 56 de la **LFP** y 288 del **CFPC**.

Por lo anterior, al no existir análisis pendiente por realizar se procede a emitir la presente resolución atendiendo a los elementos que causan plenitud convictiva en esta autoridad, cumpliendo los principios procesales que rigen todo procedimiento.

Sirve de aplicación por analogía la siguiente Jurisprudencia que a su letra señala:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una

situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396."

SEXTO. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

En el presente asunto se considera que existen elementos de convicción suficientes que acreditan que, en el inmueble ubicado en **Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México**, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55'41.5" N, Longitud 99°42'32.9" O, al momento en el que se llevó a cabo la visita de verificación se estaban prestando servicios de radiodifusión sin contar con concesión que habilitara al **PRESUNTO RESPONSABLE** para esos fines.

Se afirma lo anterior, en virtud de que del análisis de la conducta desplegada en relación con lo establecido en el precepto legal que se estima trasgredido claramente se puede advertir que se surten todos los supuestos previstos por el mismo.

En tales consideraciones, debe tomarse en cuenta que:

- 1) Se confirmó el uso de la frecuencia **103.1 MHz** en **Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México**, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55'41.5" N, Longitud 99°42'32.9" O, donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión que operaba dicha frecuencia, con el equipo consistente en: "Transmisor sin marca, sin modelo y sin número de serie; CPU sin marca, sin modelo y sin número de serie y una Antena Dipolo sin marca, sin modelo y sin número de serie", con lo que se acredita el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, correspondiente a la banda de **FM**, obrando en el expediente el

monitoreo respectivo que acredita el uso de la frecuencia y los audios de los transmisores.

- 2) Se detectó la prestación del servicio público de radiodifusión del cual no se acreditó tener concesión o permiso expedido por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación de dicho servicio.

En ese sentido, este Pleno del Instituto considera que existen elementos suficientes para determinar que el **PRESUNTO RESPONSABLE** efectivamente prestaba el servicio público de radiodifusión de forma ilegal, en franca violación del artículo 66 en relación con el 75, de la **LFTR**.

Se afirma lo anterior, en virtud de que del análisis de la conducta desplegada en relación con lo establecido en los preceptos legales que se estiman transgredidos claramente se puede advertir que se surten todos los supuestos previstos por los mismos.

Así, el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación que se resuelve en contra del **PRESUNTO RESPONSABLE** se inició por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, y actualización de la hipótesis prevista en el artículo 305, todos de la **LFTR**, mismos que establecen:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

"Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título."

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

Del análisis de los preceptos transcritos, se desprende que la conducta susceptible de ser sancionada es la prestación de servicios de radiodifusión sin contar con concesión o autorización emitida por la autoridad competente, por lo que con el fin de cumplir a cabalidad con el principio de tipicidad se debe analizar si la conducta desplegada se adecua a lo señalado por la norma.

En ese sentido, con el fin de establecer lo que debe entenderse por la prestación de un servicio de radiodifusión, resulta importante considerar lo señalado por las fracciones LIV y LXV del artículo 3 de la **LFTR**, mismas que señalan lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

...

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello;

...

LXV. Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica;

..."

De lo señalado por la **LFTR** se desprenden los elementos que componen el concepto de radiodifusión, mismos que deben ser analizados a la luz de la conducta desplegada para sustentar la determinación de incumplimiento.

En ese sentido las premisas del concepto de radiodifusión son las siguientes:

1. La propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado.
2. El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico atribuidas por el Instituto a tal servicio.
3. La población las puede recibir de manera directa y gratuita utilizando los dispositivos idóneos para ello.

La primera y la tercera de las premisas se encuentran plenamente acreditadas en el procedimiento administrativo en que se actúa al existir constancia en autos del disco compacto remitido como adjunto a la propuesta de inicio del procedimiento, en el cual se contienen las grabaciones, así como el monitoreo del espectro radioeléctrico realizados durante la visita número **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, de las cuales se desprende que efectivamente se estaban transmitiendo señales de audio, mismas que pueden ser recibidas de manera directa por la población con el simple hecho de contar con el medio idóneo, que en el presente caso lo constituye un radio receptor.

De igual forma, la primera y segunda de las premisas quedaron plenamente acreditadas durante el desarrollo de la diligencia de verificación, ya que derivado del monitoreo se detectó el uso de la frecuencia **103.1 MHz** a través de una antena omnidireccional.

Ahora bien, de la definición de servicios públicos de radiodifusión se desprenden los siguientes elementos:

- ✓ Son servicios de interés general.
- ✓ Generalmente son prestados por concesionarios.
- ✓ Son para el público en general.
- ✓ Tienen fines comerciales, públicos o sociales.

- ✓ Se prestan conforme a las leyes aplicables

Del análisis de dichos elementos se desprende que en el presente asunto el **PRESUNTO RESPONSABLE** no acreditó tener el carácter de concesionario, además de que en los archivos del **IFT** no obra concesión o permiso otorgado para operar esa frecuencia en dicha localidad.

Adicionalmente, la frecuencia utilizada para esa entidad no se encuentra registrada en la infraestructura de Estaciones de Radio de Frecuencia Modulada ("FM") publicada en la página Web del **Instituto**, circunstancia que por sí misma constituye un hecho notorio que pone de manifiesto que los servicios de radiodifusión no se prestaban conforme a la ley, no obstante que se encontraban a disposición del público en general por lo detectado y grabado en el monitoreo.

Ahora bien, otro elemento que resulta importante analizar es que con independencia de la finalidad de la estación de radiodifusión, para poder prestar dicho servicio se deben de cumplir con los requisitos previstos por la Ley, esto en virtud de que como se puede advertir de lo señalado por la norma, no existe la necesidad de acreditar un uso comercial, público o social.

Así las cosas, en el presente asunto durante la Visita de Inspección-Verificación se acreditó la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **103.1 MHz** con los siguientes equipos instalados y en operación:

- i. Equipo transmisor,
- ii. CPU, y
- iii. Antena omnidireccional.

Lo anterior, aunado a que el **PRESUNTO RESPONSABLE** no acreditó contar con concesión o permiso para la prestación del servicio público referido, por tanto, se considera que es responsable de la violación a lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75, y dicha conducta es sancionable en términos de la fracción I del inciso E) del artículo 298 todos de la **LFTR**. Asimismo, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305

de dicho ordenamiento y lo procedente es declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes empleados en la comisión de la infracción.

En efecto, el artículo 298 inciso E), fracción I de la **LFTR**, establece lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E. Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o"

En consecuencia, y considerando que el **PRESUNTO RESPONSABLE** es responsable de la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **103.1 MHz**, sin contar con concesión, permiso o autorización correspondiente que lo habilite para tal fin, lo procedente es imponer la sanción que corresponda en términos del citado artículo 298, inciso E), fracción I de la **LFTR** y conforme al citado artículo 305 procede declarar la pérdida de los equipos asegurados durante la visita de inspección-verificación, consistentes en:

- a) Transmisor sin marca, sin modelo y sin número de serie,
- b) CPU sin marca, sin modelo y sin número de serie, y
- c) Antena Dipolo sin marca, sin modelo y sin número de serie.

Lo anterior es así, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la Federación, el cual es un recurso limitado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la **CPEUM**, corresponde al Estado a través del Instituto salvaguardar su uso, aprovechamiento y explotación en beneficio del interés público.

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios judiciales:

“ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO. La Sección Primera, Apartado 1-5, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a las ondas radioeléctricas u ondas hertzianas como las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Por su parte, el artículo 3o., fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. En ese tenor, si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el derecho internacional con el del espectro radioeléctrico que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye que este último forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, sobre el que la Nación ejerce dominio directo en la extensión y términos que fije el derecho internacional conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, *el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que, como tal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, está sujeto al régimen de dominio público de la Federación,* pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana con las restricciones establecidas en las leyes y reglamentos administrativos aplicables, *pero para su aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso otorgados conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos,* los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Época: Novena Época, Registro: 170757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 65/2007, Página: 987”

“ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SU CONCEPTO Y DISTINCIÓN CON RESPECTO AL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. El artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación, sin guía artificial de ondas electromagnéticas, cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los tres mil gigahertz. Así, las frecuencias se agrupan convencionalmente en bandas, de acuerdo a sus características, y el conjunto de éstas constituye el espectro radioeléctrico, el cual integra una parte del espectro electromagnético utilizado como medio de transmisión

para distintos servicios de telecomunicaciones, y es un bien del dominio público respecto del cual no debe haber barreras ni exclusividad que impidan su funcionalidad y el beneficio colectivo. Cabe señalar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y las frecuencias que lo componen son las que están en el rango entre los tres hertz y los tres mil gigahertz y, en esa virtud, su explotación se realiza aprovechándolas directamente o concediendo el aprovechamiento mediante la asignación a través de concesiones.

Época: Décima Época, Registro: 2005184, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.72 A (10a.), Página: 1129”

En ese sentido, se concluye que el **PRESUNTO RESPONSABLE**, se encontraba prestando servicios de radiodifusión a través del uso del espectro radioeléctrico en la frecuencia **103.1 MHz**, en Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55'41.5" N, Longitud 99°42'32.9" O, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva, por lo que en tal sentido es responsable de la violación al artículo 66 en relación con el 75, y lo procedente es imponer una multa en términos del artículo 298, inciso E), fracción I, todos de la **LFTR**. De igual forma con dicha conducta se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 del mismo ordenamiento y en consecuencia procede declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes y equipos empleados en la comisión de dicha infracción.

SÉPTIMO. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN.

El prestar servicios de radiodifusión sin contar con la concesión respectiva, incumpliendo con ello lo dispuesto por el artículo 66 en relación con el 75 de la **LFTR**, resulta sancionable en términos de lo previsto en el artículo 298, inciso E), fracción I de la citada Ley, que a la letra señala:

“Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:...

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

De conformidad con los artículos 23 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, fracción V, 6, 31, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 47, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción I, y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprime el contenido de lo testado en virtud de contener datos personales confidenciales.

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización...”

Ahora bien, para estar en condiciones de establecer la multa respectiva en términos de lo dispuesto por el artículo antes transcrito, es importante hacer notar que esta autoridad resolutora carece de los elementos mínimos necesarios para su cuantificación, en razón de que de las constancias que integran el expediente en que se actúa no es posible determinar la identidad de la persona infractora, y consecuentemente el monto de sus ingresos acumulados.

Lo anterior es así, toda vez que del contenido del acta de verificación número **IFT/UC/DG-VER/392/2017**, se desprende que la persona que atendió la visita no proporcionó dato alguno que permitiera su identificación, ya que se negó a proporcionar su nombre e identificación alguna para corroborar su identidad; y de la manifestación hecha por esa persona, respecto del propietario de la estación de radiodifusión ubicada en Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, señaló: *“Mi hermano es el propietario del inmueble. Solo puedo decirles que se llama **“CONFIDENCIAL POR LEY”**”*.

A este respecto, es oportuno mencionar que la **DG-VER**, con la finalidad de allegarse de elementos que permitieran la plena identificación del presunto infractor, emitió los oficios **IFT/225/UC/DG-VER/024/2018** e **IFT/225/UC/DG-VER/025/2018**, ambos de ocho de enero de dos mil dieciocho, dirigidos a la Oficina Registral en Tenango del Instituto de la Función Registral del Estado de México y al Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística y Catastral del Estado de México, respectivamente, en los que se les solicitó lo siguiente:

“Proporcione a esta Autoridad mediante constancia debidamente certificada, el nombre de la persona física o moral propietaria y/o poseedora del inmueble ubicado en Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55'41.5" N, Longitud 99°42'32.9" O.”

En respuesta a la solicitud contenida en el oficio **IFT/225/UC/DG-VER/025/2018**, de ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio **203B10200/088/2018** de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, recibido en Oficialía de Partes del IFT el treinta y uno de enero siguiente, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, envió diverso oficio **203B13000/062/2018** de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a través del cual la Dirección de Catastro de ese mismo Instituto, informó que:

"(...) ...una vez ubicado el punto de referencia con las coordenadas proporcionadas en el oficio de referencia, en la Cartografía Catastral a nivel manzana, en el inmueble que se encuentra en el Municipio de Villa Guerrero 064, Zona Catastral 12, Manzana Catastral 072, y una vez agotada la investigación en los archivos que obran en este Instituto, no fueron localizados registros en el Padrón Catastral Municipal (...)"

Por su parte, respecto del oficio **IFT/225/UC/DG-VER/024/2018**, de ocho de enero de dos mil dieciocho la **DG-VER** no recibió la respuesta correspondiente de la autoridad requerida.

De lo anterior se advierte que no fue posible identificar al propietario del inmueble donde se aseguraron los equipos de radiodifusión relacionados con el acta de mérito y consecuentemente los ingresos del mismo, ni al propietario o responsable de los equipos de radiodifusión, es decir no se cuenta con los elementos suficientes para individualizar la sanción prevista en el artículo, 298, inciso E), fracción I de la **LFTR**.

Conforme a lo antes expuesto, resulta claro que no existe plena identificación del **PRESUNTO RESPONSABLE** toda vez que la persona que atendió la visita no proporcionó dato alguno que permitiera identificar el propietario de la estación de radiodifusión que operaba en la frecuencia **103.1 MHz**, y en consecuencia no existe dato alguno que permita a esta autoridad identificar al **PRESUNTO INFRACTOR**, no obstante los esfuerzos realizados para obtener dicha información. En consecuencia, esta autoridad resolutora considera inviable imponer una sanción económica en el presente asunto ya que no se

cuenta con los elementos mínimos indispensables para individualizar la misma, en términos de los artículos 298 y 299 de la **LFTR**.

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que en diversas ocasiones tanto el Servicio de Administración Tributaria como las Secretarías de Finanzas y Administración de algunas Entidades del país, han informado a este Instituto la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de aquellas multas en las que no se especifique el nombre de la persona física o la denominación o razón social de aquella a la que haya sido impuesta la referida sanción, haciendo la precisión de que las resoluciones que se emitan en las que se imponga una multa deberán contener los datos que permitan identificar plenamente al sancionado, tales como nombre o razón social, domicilio completo e importe a recuperar y concepto, requisitos que en su integridad resultan indispensables para que dichos órganos tributarios estén en aptitud de instaurar el procedimiento administrativo de ejecución.

Lo anterior es consistente con lo previsto en numeral 2.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, que entre otros requisitos establece los relativos al nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del infractor a quien se le ha impuesto la sanción que por su conducto se pretende ejecutar.

En otro orden de ideas, atendiendo a la naturaleza de la infracción, lo procedente es que en la presente resolución este Instituto declare la pérdida de bienes, equipos e instalaciones a favor de la Nación, con lo cual se busca inhibir las conductas que tiendan a hacer uso del espectro radioeléctrico sin que exista un título o documento habilitante para ello. Asimismo, cabe indicar que, a diferencia de los artículos 298 y 299, la sanción prevista en el artículo 305 de la **LFTR** no necesita de elementos para su individualización, pues ésta procede como consecuencia inmediata de la actualización de la hipótesis normativa prevista en ese artículo.

Por ello, en virtud de que el **PRESUNTO INFRACTOR**, no cuenta con concesión, permiso o autorización para usar legalmente la frecuencia **103.1 MHz**, y quedó plenamente

acreditado que se encontraba prestando un servicio de radiodifusión, se concluye que se actualiza la hipótesis normativa prevista expresamente en el artículo 305 de la LFTR.

En efecto, el artículo 305 de la LFTR, expresamente señala:

*"Artículo 305. **Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.**"*

En tal virtud, procede declarar la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dicha infracción el **PRESUNTO INFRACTOR**, consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0303
CPU	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0310
Antena Dipolo	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0311

Bienes que están debidamente identificados en el **acta de verificación ordinaria** número IFT/UC/DG-VER/392/2017, habiendo designando como interventor especial (depositario) a **Raúl Leonel Mulhía Arzalez**, por lo que se le deberá solicitar que en su carácter de interventor especial (depositario) ponga a disposición los equipos asegurados.

En consecuencia, con base en los resultados y consideraciones anteriores, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

RESUELVE

PRIMERO. Conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, quedó acreditado que el **PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN Y/O DEL INMUEBLE** ubicado en Domicilio Conocido, Pueblo de San Pedro Buenos Aires, Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en las inmediaciones de las coordenadas geográficas Latitud 18°55´41.5" N, Longitud 99°42´32.9" O, (identificado para efectos de la presente resolución como el **PRESUNTO RESPONSABLE**) infringió lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el artículo 75, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al haberse detectado que se encontraba prestando servicios de radiodifusión a través de la frecuencia **103.1 MHz** sin contar con concesión, permiso o autorización, no obstante lo cual, no se individualiza sanción alguna a este respecto, atendiendo a las razones expuestas en el Considerando Séptimo de esta Resolución.

SEGUNDO. De conformidad con lo señalado en las Consideraciones Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta de la presente Resolución, el **PRESUNTO RESPONSABLE** se encontraba prestando servicios de radiodifusión utilizando la frecuencia **103.1 MHz** sin contar con la respectiva concesión, y en consecuencia, con fundamento en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se declara la pérdida en beneficio de la Nación de los equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Transmisor	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0303
CPU	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0310
Antena Dipolo	Sin marca	Sin modelo	Sin número	0311

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Cumplimiento, para que a través de la Dirección General de Verificación, comisione a personal adscrito a su cargo para hacer del

conocimiento del interventor especial (depositario) la revocación de su nombramiento y en consecuencia ponga a disposición los bienes que pasan a poder de la Nación, una vez realizada la verificación de que los sellos de aseguramiento no han sido violados y previo inventario pormenorizado de los citados bienes.

CUARTO. Con fundamento en el artículo 35, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena que la presente Resolución se notifique al **PRESUNTO RESPONSABLE** en el domicilio precisado en el proemio de la presente Resolución.

QUINTO. En términos del artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se informa al **PRESUNTO RESPONSABLE** que podrá consultar el expediente en que se actúa en las oficinas de la Unidad de Cumplimiento de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 838, cuarto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03100, (Edificio Alterno de este Instituto), dentro del siguiente horario: de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 horas y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.

SEXTO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento del **PRESUNTO RESPONSABLE** que la presente Resolución constituye un acto administrativo definitivo y por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 312 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, procede interponer ante los juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, el juicio de amparo indirecto dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. Una vez que la presente resolución haya quedado firme, con fundamento el artículo 177 fracción XIX de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con el artículo 36 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, inscribábase la misma en el Registro Público de Concesiones, para todos los efectos a que haya lugar.

OCTAVO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los artículos señalados en los Considerativos Primero y Segundo de la presente Resolución.

(FIRMAS DE LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES)

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXIV Sesión Ordinaria celebrada el 8 de agosto de 2018, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/080818/500.